Un agricultor recoge pimientos cultivados con riego por goteo en un invernadero. | ANTONIO AMORÓS

Diputación y regantes exigen al Gobierno que el trasvase del Tajo no baje de los 380 hm³ al año

El informe de alegaciones, supervisado por la UA, reitera que el agua desalada solo puede ser un complemento, e insiste en que el precio debe subvencionarse para dejarlo en 0,3 euros /m³

0

F. J. Benito

05·01·22 | 21:00

El informe de alegaciones al plan hidrológico del Tajo que la Diputación, avalada por el Instituto del Agua de la Universidad de Alicante y el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica advierte de que la provincia de Alicante necesita recibir todos los años, al margen del caudal de agua desalada producido en las plantas de Torrevieja y Escombreras, un mínimo de 380 hm³ del trasvase desde el Tajo. De no ser así se comprometerá el futuro económico y social de una provincia en la que cien mil empleos dependen directamente de este agua. El estudio que ha coordinado el profesor Joaquín Melgarejo revela que **el plan hidrológico del Tajo sólo prevé que del trasvase lleguen como máximo anual un total de 197 hm³ al año**, de los que el 40% serían para el abastecimiento urbano, lo que deja el acueducto en una fuente de recursos hídricos subliminal.

Por otro lado, en el informe, la Diputación exige al Gobierno que «adopte los mecanismos de subvención necesarios para **que el precio del agua desalada para riego no supere los 0,3 euros** el metro cúbico». Recordar, en este sentido, que este recurso se paga ya a 0,85 euros/m³ y está previsto que este año supere los 1,25 euros/m³.

El recorte del Tajo-Segura obligaría a construir cuatro nuevas desaladoras
F. J. Benito

Por otro lado, los técnicos de la Diputación alertan en sus alegaciones sobre el problema que puede generar la presencia de boro (elemento químico) en las tierras de cultivo regadas con agua desalada en Torrevieja y piden, en este sentido, que el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura fiscalice la calidad del agua suministrada por las desaladoras para uso agrícola, como ya existe, por ejemplo, en países punteros como Israel, «y garantice todos aquellos mecanismos e infraestructuras que permitan la mezcla del agua desalada con el agua del río Segura».

En el informe también se apuesta por repercutir los costes de agua entre todos los usuarios de un mismo sistema de explotación, de forma que sea viable la puesta en marcha de todos los recursos de forma integral. Es decir, que no ocurra como sucede, por ejemplo, en la propia Comunidad donde **hay zonas donde casi no se paga el agua y otras, Vega Baja, Elche y Medio y Alto Vinalopó, en las que el metro cúbico se paga a precio de oro**.

La Diputación señala también que el aumento de los caudales ambientales previsto en el proyecto no está justificado porque en la actualidad el agua que circula por la cabecera del río no provoca deterioro alguno. «El estado ecológico de las masas de agua en los tramos fluviales de cabecera se califica como bueno», según la Confederación del Tajo. **Este incremento supondría, según este documento técnico, un descenso de más del 20%** en los trasvases desde el Tajo, que pasarían de 340 a 271 hm³ anuales de media. El descenso para consumo urbano sería del 18%, mientras que para el regadío alcanzaría el 21%.

El Instituto del Agua denuncia que el caudal ecológico del Tajo está hinchado de forma artificial

F. J. Benito

En cuanto al Plan del Júcar, la Diputación señala que el documento no plantea ninguna solución al problema del precio del agua, sino que lo agrava, eliminando el compromiso de no repercutir los costes de amortización de la infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó a los usuarios. Además, tampoco aborda las cuestiones más complejas que se refieren a la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Vinalopó, un problema sobre el que ha alertado el catedrático Joaquín Melgarejo. Por su parte, Ángel Urbina, de la Junta Central de Usuarios, sostiene que **esta infraestructura es el proyecto que «mejor vertebra la Comunidad»**. Carlos Mazón, presidente de la Diputación, denuncia que los planes hidrológicos «invalidan prácticamente el trasvase y son un atentado muy duro para nuestra provincia cuando más lo necesitamos y cuando más estamos exigiendo el agua que nos corresponde».